

Enfrenta Vásquez nuevo proceso por daño de más de 266 millones al erario

LAURA GÓMEZ FLORES

El ex subsecretario de Administración y Capital Humano Miguel Ángel Vásquez Reyes enfrentará en reclusión otro proceso, luego de que un juez de control lo vinculó a proceso por delitos cometidos por servidores públicos al causar daño a la hacienda pública por 266 millones 642 mil 356 pesos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia local, ese daño se debió a la suspensión del pago de cuotas de los jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En marzo del año pasado fue vinculado a proceso por un delito similar, pues al fungir como presidente suplente de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva junto con otros servidores públicos como miembros directivos, presuntamente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados al Issste.

Tal situación ocasionó un daño a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos, a lo cual se

sumó otro proceso, en diciembre pasado, por la adjudicación de un contrato por 290 millones de pesos supuestamente a una empresa para la recuperación del impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores de 2015 a 2017.

Desvíos a su agrupación

Una parte de los recursos presuntamente desviados, según la denuncia presentada, se destinó al pago de la nómina de la agrupación política Enréd@te por México, cuyo registro le fue negado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México al no acreditar el origen de unos 5 millones 675 mil 115 pesos.

Las investigaciones realizadas por la fiscalía refieren que el operador financiero del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, junto con otras personas, presuntamente formalizó tres contratos, en 2017 y 2018, con diferentes empresas, que ascendieron a alrededor de 986 millones de pesos.

Un juez de control determinó en este caso que Vásquez Reyes deberá permanecer en prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

